



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 13749-07

Denominación:	Modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales, en las condiciones que indica.
Origen:	Cámara de Diputados (moción).
Trámite:	2° trámite constitucional (comisión de constitución)
Urgencia:	Sin urgencia.
Otros comentarios:	<ul style="list-style-type: none">- Requiere para su aprobación del voto favorable de 3/5 de los senadores en ejercicio (26 votos). (discusión sobre los quórum de aprobación conforme al art. 127 CPR en relación al art. 19 N° 18).- En general y en particular a la vez. (art. 127 reglamento).- Segunda discusión (artículo 129 del Reglamento del Senado).



H. Senadora Luz Ebensperger O.

INTERVENCIÓN SUGERIDA.

Presidenta:

Quisiera plantear primeramente una cuestión de derecho que se ha venido planteando en varias reformas constitucionales en los últimos meses.

En efecto, el artículo 65 de la Constitución Política de la República entrega la iniciativa exclusiva al Presidente de la República *-al órgano Presidente de la República más allá de quién circunstancialmente ocupe el cargo-* en materias de seguridad social, como lo es ciertamente el régimen previsional que se quiere hoy modificar (Nº 6 del inciso cuarto del artículo 65); la condonación de tributos (Nº 1 del inciso cuarto del artículo 65) como el declarar que un determinado ingreso no constituye renta; y, en el manejo presupuestario del estado (art. 65 inciso tercero) respecto a las futuras pensiones de quienes se quedaron sin ahorros previsionales que serán de cargo del pilar solidario y por tanto del erario nacional.

Nuestra constitución, como la anterior y seguramente la próxima, consagran este mecanismo de iniciativa exclusiva -por lo demás que existe en términos bastante similares en el derecho comparado- porque quién dirige la marcha del Estado es el gobierno, quién toma precisamente las decisiones ejecutivas, de administración, del día a día y lo hace con capacidades y medios técnicos que sobrepasan con creces las de cualquier parlamento. A mayor abundamiento y como todos sabemos, quién responde legal y políticamente de esas decisiones es el Gobierno y no el Parlamento.

Además, quisiera detenerme en un argumento positivo en el que no hemos repasado con suficiente detalle a mi juicio: que, si una reforma se hace por vía de un cambio constitucional, al tener un quórum de aprobación aun mayor, puede o no obviar las restricciones de la iniciativa exclusiva. Se utiliza, muy apresuradamente a mi juicio, con un viejo dicho del derecho “quién puede lo más, puede lo menos”.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Pues bien, el numeral 14) del artículo 63 de la Constitución Política de la República dispone que son materias de ley “las demás (materias) que la Constitución señale como materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República”.

Teniendo presente que el constituyente ha sido particularmente cuidadoso – puntilloso al extremo- cuando distingue en la Carta Fundamental entre una reforma constitucional y la tramitación de las demás clases de leyes, principio aplicable a las normas reglamentarias pero también en esa norma el constituyente se ha limitado a sí mismo, diciendo que son propias del dominio legal y no de una reforma constitucional los asuntos de iniciativa exclusiva. Y es además lógico porque requieren de un nivel de detalle y precisión que escapan a las grandes reglas de una Constitución donde sólo se recogen los principios de un ordenamiento jurídico, por más que una reforma utilice como vehículo y se tramite como una reforma legal.

(Por tanto, legislar así, una reforma por un medio que no es idóneo, refuerza la conclusión que esta reforma se trata de un resquicio legal).

En lo que respecta al mérito del proyecto, me gustaría hacerme cargo de dos o tres consideraciones complementarias a la opinión de los demás senadores.

Cuando en julio último discutimos la Ley N° 21.248, que permitió lo que se suponía era un único y extraordinario retiro de los fondos de los afiliados administrador por la AFP, nos encontrábamos en lo peor de la crisis sanitaria. No había todavía estrategias sanitarias eficaces para combatir el Covid, eran lejanas las esperanzas que hoy tenemos en varias vacunas y la destrucción del empleo y de la economía en Chile y el mundo alcanzaban características nunca vistas en la historia.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Crisis que recurrió un gran esfuerzo fiscal del Estado y que legisló este parlamento en la protección de ese empleo y en palear los efectos sobre los ingresos de los hogares chilenos, en particular de la clase media. Afortunadamente esas crisis han ido quedando atrás y tendremos que acostumbrarnos a reabrir, a trabajar, a teletrabajar también, conviviendo con el virus. Por tanto, la realidad entre el primer y este retiro son ya muy diferentes.

En segundo lugar, deseo llamar la atención de la Sala de este honorable Senado sobre la intervención ante la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento y que consta en este segundo informe de don Mario Marcel, Presidente del Banco Central de Chile, respecto al plazo del retiro y sus efectos, por los montos que involucra.

El Presidente del Banco Central reconoció el impacto transitorio y acotado en el consumo del primer retiro y detalló las medidas que implementó el Banco para evitar un shock económico-financiero que pudo significar un menor valor en los propios fondos de pensiones, una presión sobre el tipo de cambio con que pagamos nuestras importaciones y en definitiva una inestabilidad que no podíamos y no podemos generar en medio de una crisis económica.

La Comisión de Constitución, contraria a las recomendaciones del Instituto Emisor, rebajó de 30 a 15 días el plazo para el pago del retiro pese a que textualmente el Banco Central reconoció que ya NO cuenta con las mismas herramientas que exitosamente aplicó en el primer retiro para evitar nuevamente esos efectos negativos en la economía nacional.

Finalmente presidenta, reiterar algo que dice en la comisión. Esta es una mala política pública porque no para enfrentar una crisis hoy podemos profundizar los problemas del sistema de pensiones, problema sobre la que hay una iniciativa en trámite desde enero en este Senado después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Mire presidenta, si hay algo que valoro enormemente esta tramitación y del anterior retiro, es que los chilenos tomamos conciencia que los fondos que administran las AFP son frutos del esfuerzo, del trabajo y son propiedad, propiedad de cada uno de los afiliados al sistema. Y eso afortunadamente, son pocos los que lo discuten esa propiedad.

La construcción de un régimen de seguridad social requiera además ciertos supuestos mínimos como el ahorro forzoso y la limitación de disposición de esos fondos propiedad de los afiliados. Ello porque están pensados para financiar pensiones en un futuro, en una previsión que escapa al corto plazo, y más allá de cualquier contingencia. En un país como Chile, tan dado a desastres naturales, por ejemplo, siempre puede estar la tentación de utilizar esos fondos para otras emergencias igual o más apremiantes.

De ahí que propuestas como expropiar dichos fondos para construir un tren de alta velocidad de un excandidato presidencial o el anuncio ya de un tercer retiro son altamente irresponsables.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Boletín N° S 2.145-01

Denominación:	Acusación constitucional deducida en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela
Origen:	Cámara de Diputados (art. 52 N° 2 CPR).
Trámite:	Art. 53 N° 1 CPR
Urgencia:	48 L.O.C.
Otros comentarios:	<ul style="list-style-type: none">-Requiere para su aprobación del voto favorable la mayoría de los senadores en ejercicio (22 votos).-Art. 35 Reglamento del Senado impide sesionar a las comisiones en paralelo, sin acuerdo de la Sala o de los comités parlamentarios.

INTERVENCIÓN SUGERIDA.

Presidenta,

Inicio esta intervención llamando la atención de la Sala sobre el hecho que esta es la novena acusación constitucional presentada en la Cámara de Diputados desde 2018, y la cuarta que le corresponde resolver a este Senado.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Ese hecho da cuenta del abuso de un instrumento excepcionalísimo en nuestro ordenamiento jurídico, que por razones de derecho estrictas y causales específicas busca declarar la responsabilidad constitucional de las autoridades que señala la constitución. Ese abuso del derecho, de la letra de la norma, es también reflejo de degradación de la discusión y convivencia política de la que este Congreso no está ajeno y que lastra a nuestra democracia.

El primer capítulo de la acusación, esto es, la imputación al ex ministro el dejar de ejecutar la ley en materia de orden público, que en concreto los acusadores refieren, entre otras normas, a los incisos segundos y tercero del artículo 101 de la Constitución Política de la República; la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (Ley N° 20.502), y, a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (Ley N° 18.091), obvia la relación existente entre el Ministerio del Interior- en el carácter de Ministerio encargado de la seguridad pública- y esa policía.

En efecto, la institución Carabineros de Chile, aun cuando sometido al poder civil en cuanto a las políticas general de su quehacer- está dotado de autonomía operativa y técnica que derivan de su carácter profesional y jerárquico. De lo que sigue que tal o cual actividad in situ, en el terreno mismo, es determinado por los mandos institucionales, siguiendo las directrices sí de la autoridad política, pero analizando las situaciones concretas que enfrentan policía en el lugar.

Ello responde a un criterio práctico, la dirección de estos operativos frente a hechos constitutivos de delitos responde a criterios de proporcionalidad, prudencia y eficacia que mal podría analizarse caso a caso desde el Palacio de La Moneda, por lo que la autoridad política solo dará a



H. Senadora Luz Ebensperger O.

este respecto directrices generales en cumplimiento de la función que se le ha encomendado de los cuales por ciento después pedirá cuenta pero dejará su ejecución en manos especializadas en el control del orden público.

A mayor abundamiento, en los hechos del denominado “paro de los camioneros” Carabineros actuó bajo esos criterios cuando detectó indicios de faltas o delitos de los que dan cuenta las investigaciones que lleva el Ministerio Público o los juzgados de policía local, tratándose de las infracciones a la ley de tránsito.

Presidenta, por regla general las palabras se las lleva el viento. Por suerte para nosotros, de lo que se dice aquí en la Sala del Senado, existe escrupuloso registro en el Diario de Sesiones.

Basta que me remita a las sesiones de esta Corporación de 4 de diciembre de 2019 y 13 de enero de 2020, en que se discutió la Ley N° 21.208 -popularmente conocida como la ley anti-barricadas, en cuya tramitación legislativa tuvo una destacada participación el entonces Senador Víctor Pérez-.

De aquella oportunidad recuerdo grandes intervenciones sobre el evitar criminalizar la legítima expresión del malestar, que no se podía llevar a sede penal un conflicto social y político, o, como sancionar gravemente barricadas menores en que se interrumpe momentáneamente el tránsito. Hoy felizmente constato que algunos de los que se oponían férreamente a esa ley tomaron conciencia y hoy defienden vehemente el derecho a la libre circulación.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Finalmente, de aprobarse este primer capítulo de la acusación, hay que tener presente que estaríamos imponiendo un estándar imposible a todos los sucesores del exministro Pérez.

Esto es que, sin importar su signo político u opinión sobre el control del orden público, debe hacer caso omiso de la profesionalidad de las policías, so pena de la responsabilidad constitucional, y ordenar directamente los procedimientos y a la menor provocación. Personalmente estimo sería un ejercicio interesante que quienes defienden el argumento se lo expliquen en la próxima protesta en la Plaza Baquedano.

En lo referente al segundo capítulo de la acusación constitucional, esto es la eventual vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, creo evidente que la respuesta a diferentes situaciones que alteren el orden público ha de ser necesariamente adecuada a esa situación, respuesta tomada en abstracto por las directrices del ministerio encargado de la seguridad pública y en concreto por el mando policial, sin que pueda existir en ninguno de esos casos una discriminación arbitraria -esto es irracional- pero cuyo estándar obviamente permite diferenciar ante la gravedad de la amenaza.

No obstante lo dicho, considero razón suficiente para rechazar este capítulo de la acusación que se imputen, como lo hace las páginas 43 a 45 de la acusación para efectuar la comparación, hechos de octubre de 2019 a marzo de 2020, esto es, acaecidos con anterioridad a que el exministro Pérez asumiera su cargo el 28 de julio de 2020.

En aquel tiempo era imposible el acusado podía desplegar en carácter de autor las conductas u omisiones que se le imputan, violando así un principio básico del derecho. Y era imposible porque estaba en esta Sala,



H. Senadora Luz Ebensperger O.

ejerciendo su cargo parlamentario y no tenía cargos ejecutivos e incluso más: la situación del orden público como bien recordarán eran bien distintas a nivel nacional entre ambas fechas considerando además las medidas y restricciones que con posterioridad se adoptaron por efecto de la pandemia.

En lo que resguarda al tercer y último capítulo del libelo acusatorio, parto por condenar la violencia que se ha apoderado de las calles en el último año y lamentar la caída de un menor de edad al cause del río Mapocho, para luego señalar dos circunstancias palmarias.

Como se sabe, la responsabilidad constitucional y por cierto penal, es estrictamente personal. Mal podría imputarse al exministro Pérez conductas previas y atribuidas genéricamente al Ministerio del Interior, por más que este lo dirigiera, o al propio Gobierno. Transgresiones u omisiones que adicionalmente, y en parte dado su falta de concreción, estimo tampoco han podido ser probadas.

En segundo término, nadie podría sostener que el exministro Pérez impartió una orden destinada a ese efecto o siquiera a suspender o alterar en este caso concreto los protocolos de actuación de las policías, por lo que causalmente no es posible imputarle responsabilidad. Agregar que hoy esos hechos están siendo conocidos por los tribunales de justicia, por lo que, de aprobarse este capítulo este Senado podría estar avocándose a conocer causas pendientes -conducta expresamente prohibida en el artículo 76 de la Constitución- y vulnerando gravemente la presunción de inocencia de los investigados.

En este capítulo de acusación se imputa al acusado que junto con lamentar los hechos mostrar su confianza en la actuación de Carabineros



H. Senadora Luz Ebensperger O.

de Chile. Eso es porque en efecto, al contrario de como se le ha querido pintar, Carabineros no es una asociación ilícita -un aparato organizado de poder para comer delitos en palabras de Claus Roxín- sino una institución que existe fundamentalmente existe para dar eficacia al derecho, para resguardar y asegurar el ejercicio de los derechos de todos.

De las conductas reprochables pero aisladas de algunos de sus miembros no se sigue la responsabilidad de toda una institución. En todo caso, el Congreso Nacional tiene también una cuota de responsabilidad en la materia que se deriva del retraso en despachar iniciativas para la reforma de Carabineros tales como el Proyecto de Especialización Preferente (Boletín N° 12.699-07) en primer trámite constitucional en este Senado o el proyecto que fortalece la probidad y transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín N° 12.250-25) en espera que esta Sala se pronuncie sobre las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados.

Concluyo señalando que, como se ha podido asentar en los alegatos que escuchamos, que el exministro Pérez cumplió su labor impartiendo las directrices para resguardar el orden público, además de realizar su labor política en búsqueda de acuerdos en las problemáticas que enfrentó; que no corresponde que se le imputen imputar conductas previas a su asunción en el cargo y que en ningún caso las decisiones que sí le correspondió adoptar no resultan arbitrarias, y, que ciertamente sus decisiones no contribuyeron de manera directa y causal a los hechos que se le imputan en el tercer capítulo. En consecuencia, aprobar esta acusación infundadamente constituiría una **vileza** impropia este Senado para quién hasta hace poco fue parte de esta Corporación. Por lo dicho, es que anuncio mi voto en contra de los tres capítulos de la acusación.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Boletín N° 13.129-07

Denominación:	Modifica la Carta Fundamental, para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República
Origen:	Cámara de Diputados (moción).
Trámite:	2° trámite constitucional
Urgencia:	Acuerdos de Comités
Otros comentarios:	<p>-Requiere para su aprobación del voto favorable de 2/3 de los senadores en ejercicio (29 votos). (ver consideraciones N°8 sobre el quórum de aprobación).</p> <p>-Artículo 124 Reglamento del Senado.</p>



H. Senadora Luz Ebensperger O.

CONSIDERACIONES.

1). El artículo único del proyecto sometido a votación de la Sala agrega las disposiciones transitorias 43^a a 48^a a Constitución Política de la República.

2). La disposición transitoria cuadragésima tercera (43^a) agrega a los 155 miembros de la convención constitucional del artículo 141 de la Carta Fundamental 24 cupos adicionales o supernumerarios a los pueblos reconocidos por la Ley N° 19.253 (ley indígena) [se suma luego un cupo adicional para un afrodescendiente chileno en la disposición 47^a transitoria, total 25 escaños reservados]. Asimismo:

2.1. Exige para ser candidato de estos escaños ser ciudadano, contar con el certificado emitido por CONADI que acredite la calidad de indígena de la etnia que se quiere representar y tener domicilio en las regiones del país donde se asientan dichos pueblos.

2.2. Para la inscripción de las candidaturas exige también el apoyo de al menos tres comunidades o cinco asociaciones de las registradas ante CONADI. En el caso de los pueblos Rapa Nui, Chango, Kawashkar y Yagán, basta solamente con el patrocinio de una comunidad o asociación. (situación altamente cuestionable y limita las candidaturas).

2.3. Impone el criterio de auto identificación en la urna. Esto es, permitir al elector que exprese pertenecer -sin ningún otro comprobante o certificación- a un pueblo indígena, solicitar al presidente de la mesa receptora de sufragios, la cédula electoral indígena.

2.4.) La elección se efectuará en un solo distrito en el país y la asignación de escaños se realizará conforme al siguiente detalle:

a) 5 escaños para representantes del pueblo mapuche, de los electores de la Región Metropolitana, o en las regiones IV, V, VI o VII.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

b) 5 escaños para representantes del pueblo mapuche, de los electores de las regiones XVI, VIII y IX.

c) 3 escaños para representantes del pueblo mapuche, de los electores de las regiones XIV y X

d) 1 escaño para un representante del pueblo mapuche, de los electores de las regiones XI y XII

(Total pueblo mapuche 14 escaños reservados)

e) 2 escaños para representantes del pueblo Aymara, de los electores de las regiones XV, I y II

(Total pueblo Aymara 2 escaños reservados)

f) 1 escaño reservado para un representante del pueblo Rapa Nui, de los electores de la comuna de Isla de Pascua.

g) 1 escaño reservado para un representante del pueblo Kawashkar, de los electores de la región XII.

h) 1 escaño reservado para un representante del pueblo Yagán, de los electores de la región XII.

i) 1 escaño reservado para un representante del pueblo Quechua, de los electores de las regiones XV, I y II.

j) 1 escaño reservado para un representante del pueblo Atacameño, de los electores de la región II.

k) 1 escaño reservado para un representante del pueblo Diaguita, de los electores de las regiones III y IV

l) 1 escaño reservado para un representante del pueblo Colla, de los electores de las regiones III y IV

m). 1 escaño reservado para un representante del pueblo Chango, de los electores de las regiones II, III, IV y **(Total escaños reservados 24 escaños).**

2.5. Se garantizará la paridad entre hombres y mujeres en la asignación final de los escaños para convencionales constituyentes representantes de los pueblos indígenas, lo que incluye la corrección de los resultados, en la misma lógica del sistema cebra de la disposición 30ª transitoria. Situación que resulta particularmente problemática en el mecanismo de los pueblos con un solo escaño en que podría resultar electo un candidato con una cantidad de votos mínimos.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

3). La disposición cuadragésima cuarta (44^a) distribuye el tiempo que los canales de televisión (media hora) deben destinar a propaganda electoral gratuita conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios (norma que se encuentra cristalizada al 25 de junio de 2020), asignando una duración al 13% para una franja electoral indígena y afrodescendiente chilena. (3.9 minutos).

4). La disposición cuadragésima quinta (45^a) dispone un reembolso adicional de 0.01 UF por voto obtenido para los candidatos a escaños reservados para pueblos originarios.

5). La disposición cuadragésima sexta (46^a) regula la participación del Pueblo Rapa Nui, disponiendo que en la elección de convencionales constituyentes solo podrán votar las personas Rapa Nui residentes de la comuna de Isla de Pascua, que acrediten su calidad de indígena mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Ello por las aprensiones que manifestaron sus representantes con la autodeterminación.

6). La disposición transitoria cuadragésima séptima (47^a) reserva un escaño para el pueblo tribal afrodescendiente chileno reconocido en la ley N° 21.151, para los electores de la región XV. La pertenencia a dicho pueblo se acredita por el certificado emitido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. **(+ 1 escaño reservado)**

7). La disposición transitoria cuadragésima octava (48^a) obliga a los pactos electorales y partidos políticos, a inscribir como candidatos un porcentaje mínimo de cinco por ciento (5%) del total de candidaturas, a personas en situación de discapacidad (1 persona en las listas de independientes con más de 6 personas). La situación de discapacidad se acredita por la información proporcionada al SERVEL por el Servicio de Registro Civil e Identificación o, en su caso, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, por la presentación del certificado del artículo 13 de la ley N° 20.422 o por la circunstancia de ser beneficiario de una pensión de invalidez. La omisión de esta obligación conlleva conlleva el rechazo de todas las candidaturas declaradas a la Convención Constitucional de los



H. Senadora Luz Ebensperger O.

partidos o pactos electorales respectivos que no hayan cumplido con estos requisitos.

8). RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD. El artículo 141 de la Constitución Política de la República dispone que la Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanos electos especialmente para estos efectos. Ese artículo fue incorporado al Capítulo XV de la Constitución en virtud de la Ley N° 21.200, a su vez posible gracias al acuerdo político del 15 de noviembre de 2019 y la mesa técnica que plasmó esos acuerdos.

En la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la H. Senadora Luz Ebensperger realizó reserva de constitucionalidad referente al quórum de aprobación de este proyecto -en particular de los escaños supernumerarios reservados a los pueblos indígenas y afrodescendiente chileno-.

Lo anterior, en orden a que conforme lo dispone el artículo 127 de la Carta Fundamental, para modificar el Capítulo XV se necesitan 2/3 de los Senadores en ejercicio (29 votos) y no 3/5 (26 votos), puesto que no se debe estar sólo a un criterio formal de la ubicación de la norma sino a su contenido, sino se daría el absurdo que podrían modificarse reglas aplicables a los derechos fundamentales u otros capítulos de igual importancia, por quórums de aprobación menores. Finalmente, lo que regula la norma no es una situación pasajera o transitoria, sino que considerando la única elección de los convencionales, es una disposición permanente modificar su número.

Por lo dicho, en consideración a lo dispuesto en el artículo 93 N° 3 de la Constitución, que faculta al Tribunal Constitucional a resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de una reforma constitucional, **reiterar dicha reserva.**

9). En lo que respecta al fondo del proyecto; corresponde como aprobó en general el Senado regular de la mejor manera posible la representación de los pueblos originarios en la Convención Constitucional, de manera que represente su diversidad y distribución geográfica en el país.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Así las cosas, pretender alterar y de manera tan significativa el número de convencionales, de 155 a 180, y por tanto modificar el funcionamiento de la Convención, viola flagrantemente los términos del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de 15 de noviembre de 2019; pretenden instrumentalizar con otros fines (“sacar al pizarrón a la derecha”)¹ la posibilidad de los pueblos de participar en la Convención y arriesga finalmente dejarlos sin representación, esa voluntad intransigente definitiva impidió llegar un con un texto consensuado a la Sala del Senado, incluso habiendo conformado una mesa técnica de asesores que estuvo muy cerca del acuerdo.

En segundo lugar, la distribución de los escaños reservados entre los pueblos, comprendiendo el “peso específico” del pueblo mapuche tendería a la invisibilidad de los demás pueblos reducidos a “mero acompañamiento” de los 14 representantes mapuche, en circunstancias que la creación misma de escaños reservados indígenas pretende dar solución a la representación de los pueblos originarios. Precisamente, si se llegó a 25 escaños fue por la tajante negativa de los integrantes de la comisión a ceder un cupo mapuche (por ejemplo, al pueblo chango), lo que ciertamente denota la intención anterior.

La asignación de un número fijo de convencionales sin importar la proporción de los votantes del padrón que efectivamente sugrarán por un representante indígena, rompe un principio fundamental de la democracia: **la igualdad del voto** garantizado en el artículo 15 de la Constitución Política de la República y en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Por primera vez en nuestro país un número reducido de electores (Kawésqar 3600 y 1600 Yamanes/ en total, incluye menores de edad)² tendrán garantizados sus escaños, es decir, un sólo voto es enormemente más valioso en esa elección que el de la mayoría de los chilenos. Esa

¹ “Si uno agrega a 23 constituyentes, a los 155 que ya hay, es muy difícil que la derecha pueda mantener el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”. Senador Pedro Araya T13 Radio, 30 de octubre de 2020. Disponible en <https://www.tele13radio.cl/podcast/fm/senador-araya-por-escanos-reservados-para-pueblos-originarios-la>

² <https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf>



H. Senadora Luz Ebensperger O.

diferencia se acentúa tratándose de un número tan significativo de escaños reservados -que triplica el distrito más grande en la elección de diputados que elige 8- que altera el funcionamiento de la convención. Es decir, un número menor de “super” electores decidirá, de aprobarse el texto propuesto, en definitiva el destino y los acuerdos de la convención. (debe tenerse presente también la escasa participación de otros procesos como elegir los consejeros de la CONADI).

Incluso lo que se pretende en Chile resulta extraño en la experiencia comparada: en efecto, según información proporcionada por la Subsecretaría de Servicios Sociales a la comisión, en las asambleas constituyentes de Venezuela (1999) y Bolivia (2009). En ese último país se reservan además 7 escaños sobre 130 en la Cámara de Diputados, con un 40% de la población indígena), 5 sobre 172 en la Cámara de Diputados en Colombia y 7 en Nueva Zelanda para el pueblo Maorí (con un padrón especial para saber en cual participarán). Lo anterior en la lógica que conservan la posibilidad de votar en el padrón general.

10). El principio de auto identificación se encuentra reconocido en términos generales en el artículo 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la que declara que: *“la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”*.

En nuestro país, ese principio se encuentra recogido en la letra c) del artículo 2º de la Ley N° 19.253 -la ley indígena- que reconoce como indígenas *“A quienes mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se auto identifiquen como indígenas”*. (habiendo ya reconocido a los descendientes de indígenas y a quienes detentan un apellido indígena en las letras anteriores de ese mismo artículo).

Como recoge el informe de la comisión, en el censo de 2017, 2.185.000 personas se calificaron como indígenas., mientras que registro de calidad indígena que mantiene CONADI, una población de 1.018.275 personas



H. Senadora Luz Ebensperger O.

ostenta esta condición: de ellas, 780.264 son mayores de 18 años. Del universo total, 620 mil corresponden a la etnia mapuche, seguidos por los aymaras.

En principio, el ejercicio de los derechos políticos -aun aplicando el criterio de auto identificación, admite ciertas limitaciones para evitar la distorsión que podría resultar que poca gente votara por los representantes indígenas y optaran por hacerlo en el padrón general. (o que incluso se pudieran realizar cálculos electorales en los distintos distritos para favorecer una o más candidaturas de convencionales).

La posibilidad de establecer esos límites -como sería por ejemplo la confección de un padrón especial con auto identificación o exigir el certificado que acredita la calidad de indígena- han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la tan mentada sentencia de la causa **Yatama Vs. Nicaragua**, sentencia de 23 de junio de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en sus considerandos 206 y 207 que se transcriben:

“206. La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones¹⁷². Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.

207. Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia



H. Senadora Luz Ebensperger O.

representativa. Dichos estándares, **deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo**, tomando en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, “[p]romover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”, **para lo cual se pueden diseñar normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad, tales como los miembros de las comunidades indígenas y étnicas**”. (el destacado es nuestro).

11). Propuesta de Chile Vamos.

Por el contrario, la actual propuesta de Chile Vamos contemplada en la indicación 3 ter (del Senador Galilea) -propuesta que se ha ido flexibilizando desde el piso de 3 escaños reservados más inscripción proporcional en el padrón especial, con un tope máximo de 8 escaños reservados en la versión original- resulta acorde con el acuerdo político de noviembre de 2019 e implica reservar 15 escaños dentro del límite de los 155 convencionales, respetando los principios de paridad y la proporcionalidad entre los pueblos indígenas (7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara). (requiere para su aprobación el quórum de 3/5 de los Senadores en ejercicio -26 votos- porque no crea nuevos escaños, sino que distribuye los existentes).

En lo que respecta al padrón, se crea un padrón electoral especial conformado por el registro de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, con lo que en definitiva se resguarda la regularidad y certidumbre del proceso electoral. (incluiría las personas que se auto identifiquen conforme a la ley y podría conformarse rápidamente por la transferencia de bases de datos desde CONADI a SERVEL).

Esos escaños se descontarían de los que tengan mayor desproporción entre el número de electores con respecto al número de convencionales, excluyendo a los distritos más pequeños como Tarapacá que eligen solamente 3 convencionales (diputados). Dichos distritos serán determinados por el SERVEL 30 días antes del cierre de la inscripción de candidaturas (11 de enero de 2021).



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° S-2140-05

Denominación:	Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia a la señora Natalia Andrea González Bañados y al señor Bernardo Navarrete Yáñez
Origen:	Mensaje (Segpres)
Trámite:	Art. 36 Ley N° 20.285
Urgencia:	Art. 53 N° 5 CPR (30 días a conta del ingreso/ 13 de octubre de 2020)
Otros comentarios:	<p>-Ambos nombres se votan conjuntamente.</p> <p>-Requiere para su aprobación del voto favorable de 2/3 de los Senadores en ejercicio (29 votos).</p>



H. Senadora Luz Ebensperger O.

I. CURRICULUM VITAE.

1). Natalia González Bañados, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Donde se graduó con distinción máxima (7.0). Máster en Derecho (LL.M.) en la Universidad de Chicago y fue becaria Fulbright, de la universidad de Chicago y de CONICYT, todos programas destinados a formar talentos y que tienen como requisito, no solo las buenas notas, sino la excelencia de los postulantes, que se manifiestan en los requisitos que se requieren para su postulación y el gran número de postulantes.

En el ámbito laboral, se desempeña como Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad Desarrollo. Desempeñándose con anterioridad como Profesora y Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Abogada de una importante empresa editorial (El Mercurio S.A.P); Directora Suplente de la Asociación Nacional de Prensa, y en el ejercicio privado de la profesión. Adicionalmente y en cuanto compatible con sus funciones, se ha desempeñado ocasionalmente como columnista en medios escritos (El Mercurio) y panelista de radio y TV (Canal 13).

Natalia González, personalmente o por medio de los equipos que dirige, ha participado en los últimos años además como expositores en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del H. Senado en temáticas de tanta importancia como la descentralización del país, migraciones, las modificaciones a la ley de transparencia y la modernización digital del Estado.

2). Bernardo Navarrete Yáñez, es Licenciado en Educación y Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Los Lagos, Magister en Ciencia Política por el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid.

En el ámbito laboral, es Profesor Asociado a tiempo completo en la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Su labor le ha permitido desempeñarse como director del Centro de Estudios Migratorios de la



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Facultad de Humanidades de la misma Universidad; director del Programa de Gobiernos Locales de la misma Universidad y Programa; y, Investigador Titular del Centro de Estudios de Gobierno de esa casa de estudios. Su labor académica le ha permitido participar en una gran variedad de congresos, investigaciones y publicaciones científicas en materias migratorias y de gobiernos locales -particularmente municipales de las que da cuenta su curriculum.

Comentario al punto 1: Desde el punto de vista de su formación ambos candidatos resultan idóneos para la función para los que han sido propuestos y, aunque diferentes, sus experiencias profesionales en el ámbito de las políticas públicas y la actividad academia, respectivamente, contribuirán al fortalecimiento institucional del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, generando confianza en la actividad de la institución que dirigirán, lo anterior parafraseando las palabras de la carta de los funcionarios de ese organismo dirigida a los integrantes de la comisión de Constitución del H. Senado. (confianza que se vio mermada por hechos de todos conocidos en los últimos meses y que motivó la renuncia anticipada de unos de sus consejeros).

II. OPINIONES Y PRENSA.

3). Natalia González, en su legítimo derecho de manifestar opinión, ha opinado en variadas ocasiones como da cuenta el dossier de prensa elaborado para esta ocasión por la Biblioteca del Congreso Nacional, en materias que esa recopilación permitió recopilar en: a). Reforma tributaria y transparencia en el gasto público tan en boga últimamente; b). Institucionalidad del Estado (ley de bancos, reforma al SERNAC e institucionalidad ambiental, entre otros); c). Modernización del Estado y trámite legislativo; y, d). Democracia, responsabilidad política y proceso constitucional.

4). Bernardo Navarrete, en lo que los académicos denominan “vinculación con el medio” ha opinado en materia, según el mismo dossier, que se pueden clasificar en: a). Participación electoral; b). migraciones; c). administración comunal; d). presupuesto del sector público; y, e). y últimamente el covid y plebiscito constitucional.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Comentario al punto 2: En una democracia es legítimo y sano que las personas manifiesten su opinión, con mayor razón se agradece la opinión informada de personas expertas en determinadas áreas como ocurre en la especie.

Parece insólito que el temor a desagradar a las autoridades -en este caso senadores- que intervendrán en un futuro nombramiento no se pueda disentir de una línea oficial, es decir, si quiero tener un cargo de responsabilidad en la administración tengo que quedarme callado o mejor todavía comulgar con una única línea oficial de pensamiento.

La pluralidad de pensamiento político es el supuesto base de la democracia, por lo que la censura previa, un besamanos del tipo ¿le agrada mi columna señor senador, la puedo publicar? Es indigna y degradaría al Senador que pretendiera tal cosa y a las instituciones del Estado de Chile.

Los integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia tienen opinión política y su nombramiento es político, baste recordar que los ex integrantes Vivianne Blanlot o Alejandro Ferreiro fueron nombrados consejeros inmediatamente o al poco tiempo después de desempeñarse como ministros de estado -pocos cargos más políticos que el de ministro de estado-. La idea es que por su calificación profesional y su actividad profesional sepan separar su opinión de las importantes labores del Consejo. Así como los jueces que adscriben a algunas tendencias doctrinarias o jurisprudenciales, los comisionados tienen probablemente una visión del rol del Estado y de la política, lo importante, es que esas ideas no invadan completamente su juicio y resoluciones.

Indudablemente, falta todavía que la comisión de constitución del H. Senado escuche a los candidatos en audiencia pública antes de emitir una opinión, pero a priori por experiencia y calificación parece claro que pueden asumir y desarrollar con plena responsabilidad la labor para los que han sido propuestos.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

III. CONSULTA PÚBLICA.

Como es habitual en estas instancias, la comisión de Constitución del H. Senado abrió una fase de consulta pública, al cabo del cual se recibieron 4 opiniones en particular referentes a Natalia González, sobre el particular:

a). No corresponde pronunciarse sobre las opiniones de don Patricio Alarcón Rodríguez y de don Sergio González Aravena, periodista del Canal CNN Chile y abogado funcionario o ex funcionario del Consejo para la Transparencia, respectivamente, por cuanto se desconoce su intención y el riesgo de prejuicio, que considerando sus actividades, es alto. Teniendo presente además que la opinión de la asociación de funcionarios del Consejo efectuada por la vía institucional.

b). No corresponde pronunciarse sobre la opinión de don Mauricio Olave Asencio, que confunde a raíz de un reciente reportaje de Chilevisión, a Libertad y Desarrollo con la Fundación Jaime Guzmán cuestionada - injustamente- por los informes de asesoría en la Cámara de Diputados.

c). Si correspondería pronunciarse por la opinión de don Matías Menceyra Fernandez, que cuestiona la pertinencia de ratificar el nombramiento de Natalia González por la supuesta “opacidad” en el financiamiento de Libertad y Desarrollo y la intención de la candidata propuesta de seguir ejerciendo sus labores allí.

En efecto, los consejeros del Consejo para la Transparencia no tienen dedicación exclusiva en sus cargos, y es compatible con el ejercicio profesional en organizaciones como Libertad y Desarrollo. Al respecto, basta con remitirse a los recientes casos de Gloria de la Fuente, que hasta que asumió la presidencia del Consejo hace poco tiempo, dirigió la Fundación Chile 21.

Analizado el sitio web institucional de Libertad y Desarrollo, esa institución tiene a disposición del público la conformación de sus órganos directivos y equipos de trabajo, de sus actividades y publicaciones. A mayor abundamiento tiene publicadas sus memorias anuales desde 2013 a la



H. Senadora Luz Ebensperger O.

fecha -con la descripción detallada de sus actividades-, una canal de denuncias y sus principios y línea editorial.

Revisado los centros de pensamientos similares parece ser que Libertad y Desarrollo se encuentra sobre el estándar, en efecto:

- a) Esa información no se encuentra disponible en la Fundación Horizonte Ciudadano, ligada a la expresidenta Bachelet. Fundación sobre la que se desconoce si es financiada con la remuneración y asignaciones que reciben los ex presidentes de la República, por ejemplo.
- b) Tampoco en la Fundación Chile 21, que contiene una declaración de principios de transparencia sobre la labor que realiza, pero donde por ejemplo no están disponibles sus memorias anuales y balances, que ofrece, pero a los cuales no es posible acceder.
- c) En el mismo sentido, el Centro Democracia y Comunidad y el Instituto Libertad no presentan información relevante sobre su actividad.

No obstante, en honor a la verdad, en lo que respecta al financiamiento el Centro Democracia y Comunidad, dirigido por importantes personeros de la DC, es el único centro de los revisados, que declara que “para realizar esta tarea contamos con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer y realizamos prestación de servicios de asesoría técnica y política”, lo cual es perfectamente legal en los márgenes y con las limitaciones de la Ley sobre Transparencia, Límite, Control del Gasto Electoral y la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.

Comentario al punto 3: Natalia González dirige un equipo en Libertad y Desarrollo, pero no tiene la responsabilidad de dirigir ese centro de pensamiento por lo que mal podría imputársele responsabilidad institucional sobre el manejo del mismo.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

No obstante lo anterior, por lo dicho, al parecer esa institución al día de hoy se sitúa por sobre los estándares nacionales y de sus pares en materia de transparencia.

El proyecto de ley boletín N° 12100-07, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, que fue despachado desde la Comisión de Gobierno a la Sala del Senado para su votación en general, puede resultar la ocasión propicia para exigir mayor transparencia, en particular respecto a su financiamiento, privado pero en particular público, que reciben estas instituciones que prestan asesorías a parlamentarios y demás autoridades en la adopción de políticas públicas.



SOLICITUD DE VOTACIÓN SEPARADA
BOLETÍN N° 13.129-07

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL, PARA RESERVAR ESCAÑOS A REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO CONSTITUYENTE QUE SE CONFORME PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

(Art. 164 del Reglamento del Senado)

- 1). La disposición cuadragésima tercera transitoria de la Constitución agregada por el artículo único del proyecto.
- 2). La disposición cuadragésima cuarta transitoria de la Constitución agregada por el artículo único del proyecto.
- 3). La disposición cuadragésima quinta transitoria de la Constitución agregada por el artículo único del proyecto.
- 4). La disposición cuadragésima sexta transitoria de la Constitución agregada por el artículo único del proyecto.
- 5). La disposición cuadragésima séptima transitoria de la Constitución agregada por el artículo único del proyecto.
- 6). La disposición cuadragésima octava transitoria de la Constitución agregada por el artículo único del proyecto.